

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ángel IBÁÑEZ HERNANDO, Llanos DE LUNA TOBARRA y María Isabel PRIETO SERRANO, Diputados, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.**

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) representa un símbolo del compromiso del Estado con quienes sirven al interés general. Durante décadas ha garantizado la libre elección sanitaria, la estabilidad del sistema sanitario público y la seguridad de cientos de miles de empleados públicos y sus familias. Su éxito a lo largo de los años se debe a una gestión responsable y a un modelo de colaboración público-privada que ha demostrado eficacia, calidad y sostenibilidad, incluso en los momentos de mayor dificultad económica y de mayor incertidumbre política.

Sin embargo, hoy, de nuevo, ese modelo se encuentra en un momento crítico por la falta de rumbo y de compromiso del Gobierno. La gestión actual ha puesto a MUFACE en una situación financiera límite, fruto de años de desidia, de improvisación presupuestaria y de una alarmante falta de previsión.

La prórroga reiterada de los Presupuestos Generales del Estado, la ausencia de una planificación plurianual y la incapacidad para adaptar la financiación a la realidad sanitaria han provocado un deterioro sin precedentes: el remanente de Tesorería ha pasado en menos de un año de más de 280 millones de euros a apenas ocho millones, algo que ha dejado a la mutualidad en una situación cercana al colapso operativo.

Lejos de asumir responsabilidades y reforzar el modelo, el Gobierno parece decidido a debilitarlo deliberadamente, utilizando como coartada el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para introducir reformas que abren la puerta

a la incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud. Detrás de esta fórmula aparentemente técnica se esconde un objetivo político claro: dismantelar progresivamente un modelo que funciona, vaciándolo de contenido hasta hacerlo inviable.

No se trata, por tanto, de una cuestión técnica o contable, sino de una decisión política de gran calado que amenaza con romper un acuerdo histórico entre el Estado y sus servidores públicos. El Gobierno está conduciendo a MUFACE hacia su extinción, sacrificando la estabilidad del sistema mutualista y la confianza de miles de funcionarios en aras de una agenda ideológica que desprecia la gestión eficiente y la libertad de elección.

El malestar creciente entre los empleados públicos es el reflejo lógico de esta política errática y opaca. Los mutualistas perciben que el Gobierno ha abandonado su obligación de garantizar la viabilidad de MUFACE y ha emprendido una estrategia encubierta para asfixiarla económicamente, con la vista puesta en integrar silenciosamente a todos los funcionarios en el sistema público de salud, sin transparencia, sin diálogo y sin evaluación de impacto alguno.

El resultado de esta deriva es un modelo en crisis financiera, una gestión sin rumbo y un conjunto de servidores públicos que se siente traicionado por un Gobierno que, mientras presume de reforzar los servicios públicos, abandona a su propio personal y pone en riesgo un sistema de protección social que ha sido ejemplo de estabilidad, eficiencia y confianza durante más de cuatro décadas.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

- ¿Tiene el Gobierno la intención de plantear la incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud y la adscripción voluntaria a MUFACE, aun siendo plenamente consciente de que ello supondría el dismantelamiento progresivo del modelo mutualista y la pérdida del derecho histórico a la libre elección sanitaria de los empleados públicos?

- ¿Reconoce el Gobierno que la gestión actual ha llevado a MUFACE a una situación financiera crítica, reduciendo su remanente de Tesorería de más de 280 millones a apenas ocho millones en un año, y qué medidas piensa adoptar para garantizar la sostenibilidad económica de la mutualidad sin recurrir a su asfixia presupuestaria?
- ¿Por qué motivo el Gobierno no ha dotado a MUFACE de los recursos necesarios para afrontar el incremento de los costes sanitarios y el envejecimiento del colectivo mutualista, y qué explicación ofrece ante el déficit de más de 64 millones de euros previsto para 2025?
- ¿Tiene previsto el Gobierno aprobar una inyección presupuestaria extraordinaria o un plan de financiación plurianual que evite la quiebra técnica de la mutualidad, o continuará utilizando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado como excusa para su abandono financiero?
- ¿Qué valoración hace el Gobierno del propio diagnóstico interno de MUFACE, que identifica como amenazas la insuficiencia de financiación, la dependencia de actores externos y la falta de competitividad retributiva, y qué actuaciones concretas piensa emprender para corregir dichas debilidades?
- ¿Dispone el Gobierno de algún estudio o informe sobre el impacto económico y organizativo que tendría para el Sistema Nacional de Salud la absorción masiva de los mutualistas, y se compromete a hacerlo público antes de adoptar cualquier decisión estructural sobre el modelo?
- ¿Por qué no se ha convocado una mesa de diálogo real con las organizaciones representativas de los empleados públicos para abordar con transparencia el futuro de MUFACE y las implicaciones de las reformas que el Gobierno planea impulsar?
- ¿Está dispuesto el Gobierno a comprometerse públicamente, de manera firme y sin ambigüedades, a mantener el modelo mutualista en su integridad, garantizando su financiación estable, su sostenibilidad a largo plazo y la libre elección sanitaria de los empleados públicos?



Madrid, 24 de octubre de 2025

Fdo:

LOS DIPUTADOS

Vº Bº *Martensius*
LA SECRETARIA GENERAL